

Nº 204
AÑO LXVI
JULIO-DICIEMBRE 1998
Fundada en 1933

ISSN 0303 - 9986



REVISTA DE DERECHO

20 SET. 2000

**UNIVERSIDAD DE
CONCEPCION**

**Facultad de
Ciencias Jurídicas
y Sociales**

delito civil, cuya reparación es de carácter civil, regida por las normas del Código civil y sujeta a la competencia de los tribunales del fuero común y no del laboral, desde que los juzgados del trabajo sólo tienen competencia para acciones indemnizatorias derivadas del contrato de trabajo; pero no para las extracontractuales (art. 420 letra a) C. del Trabajo).

Debería entenderse así clausurado el debate jurisprudencial a que esta cuestión ha dado lugar, aunque con la advertencia que siempre ha de hacerse cuando se trata de nuestra Corte Suprema: de ella jamás puede decirse que todo está dicho para siempre. Pero hasta tanto no quiera proporcionarnos una sorpresa, el problema referido está resuelto y a nuestro entender, como lo hemos sostenido antes, dentro de la mejor doctrina y análisis jurídico que ya había hecho la doctrina.

3. RESPONSABILIDAD PRECONTRACTUAL. RUPTURA INJUSTIFICADA DE NEGOCIACIONES AVANZADAS. DAÑOS CAUSADOS

DOCTRINA: La ruptura injustificada de negociaciones avanzadas obliga a reparar el daño causado y probado bajo el fundamento de los arts. 2284 y 2329 del Código Civil. En la etapa de conversaciones preliminares encaminadas a la celebración de un contrato, las partes intervinientes tienen la obligación de obrar dentro de los límites de la buena fe que debe manifestarse en una conducta leal y honesta, poniendo cada una lo necesario para que el contrato se llegue a perfeccionar. Los tratos preliminares no obligan a contratar, pues ello sería contrario a la libertad contractual; pero sí la de indemnizar los perjuicios si las negociaciones se interrumpen abruptamente, sin causa justificada, porque la libertad contractual no constituye un derecho absoluto, de donde se sigue que no puede ejercerse en forma abusiva, causando con ello daño a la contraparte. Si las partes habían llegado ya a un proyecto de contrato que establecía las bases del negocio con absoluta precisión, faltando sólo que la Municipalidad autorizara la instalación del giro comercial pertinente, no es razonable el retiro de las negociaciones de la futura arrendataria basada en que no se obtenía dicha autorización si los trámites municipales para modificar el plano regulador que permitiese ese negocio estaban ya tan avanzados que era próxima su terminación, la que, por lo demás, en definitiva se obtuvo. La demandada debe reparar los daños consistentes en los gastos en que había incurrido la demandante que tenía la fundada esperanza en que el contrato se celebraría.

Corte de Apelaciones de Concepción, 30 de junio de 1999, autos rol civil 1530-96, Soc. Ruz de la Barra con Comar S.A.

COMENTARIO: La sentencia recoge la doctrina que la misma Corte de Concepción había ya establecido en la sentencia de 5 de junio de 1996 (autos rol civil 374-93 Forestal Bío-Bío con Madesal), que en su oportunidad comentamos en esta misma revista (N° 196, 1996, pp. 179 y sgts.). Nos remitimos pues a lo que entonces expresamos, recordando que esa doctrina fue ratificada por la Excm. Corte al desestimar la casación deducida en su con-

tra. La sentencia actual, que no fue recurrida por la demandada ante la Corte Suprema, contribuye entonces a fijar lo que ya es la doctrina cierta entre nosotros, a propósito de la responsabilidad precontractual, siguiendo por lo demás a la que es común en el derecho comparado desde hace tiempo; pero que aquí sólo en los últimos años se ha recogido.

4. ASOCIACION O CUENTAS EN PARTICIPACION. IMPOSIBILIDAD DE ALTERAR EN LA REPLICA LA ACCION DE DEDUCIDA. LA ASOCIACION REQUIERE ELEMENTOS PROPIOS DE UNA SOCIEDAD Y NO ES TITULO TRASLATIVO. NO SON ADMISIBLES FUNDAMENTOS CONTRADICTORIOS PARA UNA MISMA PRETENSION

DOCTRINA: Es legalmente inadmisibles alterar en la réplica la acción deducida, cambiando el objeto para el cual se dice celebrado un contrato de asociación o cuentas en participación. La asociación es una forma particular de sociedad que carece de personalidad jurídica y patrimonio colectivo, administrada por uno de los socios bajo su nombre y responsabilidad. No tiene tal carácter un simple acuerdo para adquirir un inmueble en común y la posible plusvalía del mismo no es la utilidad a que se refiere una asociación pues ésta dice relación con la división de los beneficios de un negocio. Si se alega la existencia de una asociación como pacto mercantil, no puede luego pretenderse que tenga un objeto civil. Si bien procesalmente puede admitirse que se sostenga la proposición conjunta de un mandato y de una asociación o cuenta en participación para un mismo objeto, desde el punto de vista del fondo de la acción ello no es admisible porque implica proponer dos causas de pedir para un mismo objeto, dejando la elección al juez, el que está inhabilitado para hacerlo. El juez no puede tomar en un proceso civil un rol inquisitivo ordenando medidas para mejor resolver inconsultas y para medios de prueba no admitidos por la ley civil.

Corte de Concepción, autos rol civil 196-99 Quezada con Tapia.

COMENTARIO: He aquí una cuestión poco común que comprende problemas procesales y de fondo respecto de un contrato infrecuente como es el de asociación o cuentas en participación.

Un comerciante demanda pidiendo al tribunal que ordene a la demandada a transferirle el cincuenta por ciento de un inmueble bajo la base que celebró con ella un contrato de asociación o cuentas en participación para la compra de ese bien. Agrega que de los hechos que relata resulta que se celebró un mandato para comprar el inmueble obrando la demandada a nombre propio. Como la demandada, junto con negar la existencia de tal asociación, sostiene que ésta no puede tener jurídicamente tal objeto, en la réplica sostiene que la asociación se celebró para contratar un mutuo que permitiese esa adquisición.

El tribunal de primera instancia, por su parte, en una actuación desusada, ante la falta de pruebas de la demandante, como medida para mejor resol-